

número 55/1991 en el que son partes, de una, como demandante don Manuel Cerdón Fernández, y de otra como demandada la Administración General del Estado, representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de fecha 21 de diciembre de 1990, que desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 6 de julio de 1990, sobre el abono del importe por traslado en taxi para una consulta.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Estimar el presente recurso y declarar nula la Resolución recurrida, por no ser conforme a Derecho, sin costas.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 31 de julio de 1992.—El Ministro para las Administraciones Públicas.—P. D. (Orden 25 de mayo de 1987 «Boletín Oficial del Estado» del 30), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó García.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.

**20276** *ORDEN de 31 de julio de 1992 por la que se dispone la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el recurso contencioso-administrativo 563/1990, promovido por don Miguel Martínez Calabria.*

Ilmos. Sres.: La Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado sentencia, con fecha 23 de marzo de 1992, en el recurso contencioso-administrativo número 563/1990, en el que son partes, de una, como demandante, don Miguel Martínez Calabria, y de otra, como demandada la Administración General del Estado, representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de fecha 14 de febrero de 1990, que desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local de fecha 15 de noviembre de 1989, sobre jubilación por invalidez.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallo: Que estimando en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don Rafael García Valdecasas Ruiz, en nombre de don Miguel Martínez Calabria contra la Resolución de 14 de febrero de 1990, del Ministerio para las Administraciones Públicas, que en alzada confirma la anterior de 15 de noviembre de 1989 que había declarado la jubilación con fecha 1 de septiembre de 1989, debe declarar y declara que procede reconocer al recurrente la mejora de pensión de jubilación por gran invalidez desde el 1 de diciembre de 1989, anulando la resolución impugnada en cuanto se opone a la anterior declaración, por no resultar en ello ajustada a derecho y manteniéndola en lo demás. Sin que haya lugar a expresa condena en costas.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 31 de julio de 1992.—El Ministro para las Administraciones Públicas, P. D. (Orden de 25 de mayo de 1987, «Boletín Oficial del Estado» del 30), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó García.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director técnico de la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local.

**20277** *ORDEN de 31 de julio de 1992 por la que se dispone la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en los recursos contencioso-administrativos acumulados números 318.358 y 318.385, promovidos por doña María Luz Aucejo Torres y otros.*

Ilmos. Sres.: La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia, con fecha 10 de abril de 1992, en los recursos contencioso-administrativos acumulados números 318.358 y 318.385, en el que son partes, de una, como demandantes, doña María Luz Aucejo Torres, doña María Inmaculada Pla Vilar, doña María Concepción Sánchez Palomo, doña Silvia Amalia Ingenieros Spiking, doña María Begoña Sánchez Sanz, doña María Isabel Rodríguez Arribas, doña Montserrat Vilaseca Benedicto, doña Desamparados Saiz Ortiz, doña María Pilar Ana Silos Sánchez, don José María Caravaca Rueda, don Joaquín Pedro Vaño Gironés, don Carlos Galán Valdís, don Francisco Javier González Torres, don Jesús Lorenzo Morales y doña María Victoria López López, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de fecha 12 de enero de 1989, que desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de fecha 7 de octubre de 1988, sobre nombramiento de funcionarios de carrera del Cuerpo Técnico de la Administración de la Seguridad Social.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Que, estimando los recursos contencioso-administrativos acumulados números 318.358 y 318.385, interpuestos por doña María Luz Aucejo Torres y por el Letrado don Nicolás Sartorius Alvarez de Bohorques, en nombre y representación de las personas relacionadas en el encabezamiento, contra la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de 12 de enero de 1989, desestimatoria del recurso de reposición promovido frente a la Resolución de la misma Secretaría de 7 de octubre de 1988, debemos anular y anulamos las Resoluciones impugnadas por ser contrarias al ordenamiento jurídico, declarando el derecho de los recurrentes a que les sean ofrecidas las plazas adjudicadas a los funcionarios de nuevo ingreso por la Resolución de 7 de octubre de 1988, mediante el oportuno concurso; sin hacer expresa imposición de costas.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 31 de julio de 1992.—El Ministro para las Administraciones Públicas, P. D. (Orden de 25 de mayo de 1987, «Boletín Oficial del Estado» del 30), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó García.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Función Pública.

**20278** *ORDEN de 31 de julio de 1992 por la que se dispone la publicación para general conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo número 58.181, promovido por don Angel Ruiz Valdés.*

Ilmos. Sres.: La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, ha dictado sentencia, con fecha 24 de septiembre de 1991, en el recurso contencioso-administrativo número 58.181 en el que son partes, de una, como demandante don Angel Ruiz Valdés, y de otra como demandada la Administración General del Estado, representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de fecha 15 de marzo de 1989, que desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de la Inspección General de Servicios de la Administración Pública de fecha 24 de octubre de 1988, sobre incompatibilidades.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Angel Ruiz Valdés, en su propio nombre, contra la Resolución del Subsecretario para las Administraciones Públicas,